

AVISO GENERAL

21 de septiembre de 2009

Año fiscal 2009-2010

Sobre el requisito para candidatos a certificación o recertificación de certificaciones de conducta profesionales; los criterios y condiciones para aceptar dichos certificados; responsabilidad del candidato en el trámite; procedimiento para la presentación y vigencia de los certificados; abogados y abogadas exentos del trámite.

Desde la implantación de la certificación de interventores neutrales en la Rama Judicial, el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos ('el Negociado') ha requerido la presentación de certificaciones de conducta profesional como parte de los documentos requeridos para este fin. El propósito de estas certificaciones de conducta profesional es evidenciar que aquellas personas con profesiones reglamentadas están cumpliendo con las exigencias y la ética de su profesión.

En los últimos años, varias de las juntas reglamentadoras y profesiones colegiadas han adoptado diversas medidas para la concesión de estas certificaciones, entre ellas el requerimiento de pago o la presentación de autorizaciones escritas por parte del profesional. En algunas otras circunstancias, el trámite de estas certificaciones ha conllevado al Negociado diversas gestiones administrativas con agencias, juntas e instituciones; trámites que resultan en dilación y espera considerable para finalizar la evaluación de solicitudes presentadas en nuestra oficina.

Tomando en cuenta estas circunstancias, la experiencia con el trámite para la solicitud de certificaciones de conducta profesional, y en el marco de las facultades delegadas que el *Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos* (4 L.P.R.A 582 et. seq.) y el *Reglamento de Certificación y Educación Continua* (1999) le confieren al Negociado, adoptamos las medidas siguientes:

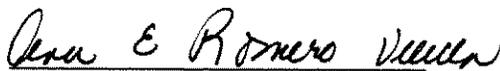
1. Una persona que posea una licencia para ejercer una profesión reglamentada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluirá como parte de los documentos requeridos para una certificación o recertificación ante el Negociado, una 'certificación de conducta profesional' (CCP) de la junta, colegio u organización autorizada a expedir dicho certificado.

21 de septiembre de 2009

2. El Negociado considerará como válidas solamente certificaciones en original y expedidas en una fecha no mayor de seis (6) meses al momento de ser presentadas al Negociado.
3. Si la junta o entidad que provee la certificación sólo remite la misma directamente al Negociado, la persona candidata a una certificación o recertificación presentará a con su solicitud evidencia de que inició la petición. En estas circunstancias el Negociado no finalizará la evaluación de la solicitud hasta el recibo de la CCP.
4. Sólo las personas autorizadas a ejercer la abogacía en Puerto Rico están exentos de estas disposiciones. El Negociado solicitará directamente la Tribunal Supremo de Puerto Rico el CCP en el caso de abogados y abogadas.

Estas disposiciones tienen vigencia inmediata.

En San Juan, Puerto Rico, 21 de septiembre de 2009.



Ana E. Romero Velilla

